

AUTO N°  
N° 000948 DE 2013

**POR EL CUAL SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS CONTRA ACUACULTIVOS  
LOS GALLITOS LIMITADA IDENTIFICADA CON NIT 806.016.265-9,**

La Gerente de Gestión Ambiental (C) de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A. con base en lo señalado en el Acuerdo N° 006 del 19 de abril de 2013 expedido por el Consejo Directivo, y en uso de las facultades legales conferidas por la Resolución N° 00205 fechada 26 de abril de 2013 CRA, la Constitución Nacional, Ley Marco 99 de 1993, teniendo, Ley 1333 de 2009, Decreto 1713 de 2002, Decreto 838 del 2005, Decreto 3930 de 2010, Ley 1437 del 2011 y demás normas concordantes y,

#### CONSIDERANDO

##### Presupuestos Fáticos

Que esta Corporación mediante Resolución No 00026 de Febrero 3 de 2.009 otorgó un permiso de vertimientos líquidos a la camaronera Acuacultivos los Gallitos Limitada; este Acto administrativo se notificó personalmente el día 13 de Febrero de 2.009.

Que el párrafo segundo del artículo primero de la Resolución No 00026 de Febrero 3 de 2.009, dispone que el permiso de vertimientos de líquidos queda condicionado a la realización semestral de una caracterización a las aguas residuales industriales generadas por su actividad productiva.

Que esta Corporación mediante Auto No 00182 del 9 de Mayo de 2.012, dispone el inicio de una investigación administrativa contra camaronera Acuacultivos los Gallitos Limitada por incumplir con lo dispuesto en la Resolución No 00026 de Febrero 3 de 2.009.

Que esta Corporación mediante Autos 00970 de Octubre 7 de 2.010 y 00002 de Enero 21 de 2.013, realizó requerimientos a la camaronera Acuacultivos los Gallitos Limitada, en procura de que cumplieran con sus obligaciones derivadas del permiso de vertimientos concedido en el año 2.009.

Que una vez iniciado el procedimiento sancionatorio ambiental se hace imperioso ejecutar labores de verificación de los hechos, tal como lo ordena el artículo 2.2 de la ley 13339 de 2.009, que señala "La autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios"

En procura de alcanzar esa constancia probatoria, esta Corporación el día 4 de Enero de 2.013, practicó visita al lugar de la explotación camaronera, que derivó en el informe técnico 00187 de 22 de Marzo 2.013, informe que tiene como principales conclusiones las siguientes:

- La empresa camaronera Acuacultivos los Gallitos Limitada, representada legalmente por el señor Luis Eduardo Curiel Fuenmayor, no ha presentado caracterización de las aguas servidas de la producción.
- La empresa camaronera Acuacultivos los Gallitos Limitada, representada legalmente por el señor Luis Eduardo Curiel Fuenmayor, no ha especificado tiempo de vertimiento mensual y anual y no ha presentado ante esta Corporación memorias del sistema de tratamiento de aguas residuales generadas por el proceso productivo.

Que no existe constancia dentro del expediente No 1527-350 que adelanta esta Corporación Ambiental, de documentos y actividades que corroboren el cumplimiento de las obligaciones impuestas a la camaronera Acuacultivos los Gallitos Limitada,

AUTO N° 000948 DE 2013

**POR EL CUAL SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS CONTRA ACUACULTIVOS  
LOS GALLITOS LIMITADA IDENTIFICADA CON NIT 806.016.265-9,**

representada legalmente por el señor Luis Eduardo Curiel Fuenmayor, en la Resolución No 00026 de Febrero 3 de 2.009, ni en los Autos 00970 de Octubre 7 de 2.010 y 00002 de Enero 21 de 2.013.

Que el párrafo del artículo 1 de la ley 1333 de 2.009 presume la culpa o dolo del infractor que tiene la carga de la prueba para desvirtuar las conductas que se le endilgan.

**Presupuestos Legales.**

Es pertinente, tener en cuenta lo que expresado por la Constitución Política de la República de Colombia artículo 80 *"El Estado deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados..."*.

Ahora bien, la Honorable Corte Constitucional, al respecto en la sentencia C – 595 del 27 de Julio de 2010, M.P. Dr. JORGE IVAN PALACIO PALACIO, en este sentido: *"... respecto a la carga probatoria en materia ambiental, aseguró con la expedición de la Ley 1333 de 2009, se procuró otorgar una lectura más renovada de la protección del medio ambiente y los principios que la inspiran en el mundo contemporáneo, en la búsqueda de avanzar significativamente frente a las debilidades del procedimiento administrativo sancionador. Así declara la titularidad del poder sancionatorio administrativo en cabeza del Estado, establece un procedimiento ambiental claro y expedito que garantice el debido proceso administrativo y define las medidas preventivas y sancionatorias en materia ambiental, entre otros aspectos. La función de las sanciones administrativas en materia ambiental es preventiva, correctiva y compensatoria para garantizar la efectividad de los principios y fines de la Constitución, los tratados internacionales, la ley y el reglamento. ..."*

*La regla general que en materia sancionatoria ambiental lleva a presumir la culpa o el dolo en las infracciones ambientales, presunción que encaja dentro de las denominadas presunciones legales –iuris tantum- toda vez que admiten prueba en contrario, como puede advertirse de una lectura literal del texto de los párrafos cuestionados. En esa medida, antes de imponerse la sanción definitiva, el presunto infractor podrá desvirtuar la presunción utilizando todos los medios probatorios legales. Para la Corte, la presunción legal establecida y la consecuente inversión de la carga de la prueba no desconocen el principio de presunción de inocencia. A su juicio, este procedimiento de técnica jurídica adoptado por el legislador en desarrollo de su potestad de configuración, busca hacer efectivos bienes jurídicos constitucionales de vital importancia como lo es la conservación del ambiente sano para la preservación de la humanidad. Bien constitucional que constituye un objetivo de principio dentro del Estado social de derecho (arts. 1º, 2º y 366 C.P.), un derecho fundamental por conexidad al estar ligado a la vida y la salud (arts. 11 y 49 C.P.), un derecho colectivo que compromete a la comunidad (art. 88 C.P.) y un deber constitucional en cabeza de todos (arts. 8º, 79, 95 y 333 C.P.). De ahí el reconocimiento internacional de que el medio ambiente es un patrimonio común de la humanidad porque su protección asegura la supervivencia de las generaciones presentes y futuras. Al mismo tiempo, la responsabilidad administrativa ambiental que se establece en las normas parcialmente demandadas, surge como consecuencia de la degradación de bienes de naturaleza generalmente demanial (aguas, montes, espacios naturales) o de valores difusos (salud humana). El "garantizar la sostenibilidad del medio ambiente" como objetivo del desarrollo del milenio (Meta 7ª) de la Organización de las Naciones Unidas, representa las necesidades humanas y los derechos básicos de todos los individuos del planeta y el no alcanzarlos podría multiplicar el riesgo mundial de inestabilidad y degradación del medio ambiente. En ese sentido, la aprobación de la Ley 1333 de 2009 obedeció al reconocimiento de la existencia empírica de situaciones problemáticas recurrentes que afectan bienes jurídicos de importancia trascendental para la sociedad. Atiende a la*

AUTO N° 000948 DE 2013  
N° 000948

**POR EL CUAL SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS CONTRA ACUACULTIVOS  
LOS GALLITOS LIMITADA IDENTIFICADA CON NIT 806.016.265-9,**

*preocupación universal de consagrar mecanismos efectivos para la protección del ambiente sano y garantizar un modelo sostenible de desarrollo).*

*Para la Corte, la creación de la presunción legal supera el juicio de razonabilidad por cuanto atiende la correspondencia entre la experiencia –circunstancias ambientales de degradación- y la defensa del bien jurídico constitucional –preservación del ambiente sano para la supervivencia de la humanidad- bajo los principios internacionales ambientales. Si bien la regla general es que los sujetos procesales deben demostrar los hechos que alegan como fundamento de la pretensión –onus probando incumbi actori- también lo es que con el ánimo de propender por la efectividad de los bienes jurídicos constitucionalmente relevantes, el legislador podía liberar al Estado de la carga de la prueba –redistribución de las cargas procesales- sin perjuicio del que presunto infractor pueda desvirtuar la culpa o el dolo mediante prueba en contrario. En esa medida, la presunción general establecida en las normas demandadas se acompasa con la Constitución, toda vez que no exime al Estado de su presencia activa en el procedimiento sancionatorio ambiental a efectos de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales, de conformidad con el procedimiento sancionatorio regulado en la Ley 1333 de 2009. Advirtió que las disposiciones condicionadas no establecen una presunción de responsabilidad sino de culpa o dolo del presunto infractor ambiental, por lo que las autoridades ambientales deben verificar la ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal eximente de responsabilidad. De este modo, la presunción general consagrada en las normas mantiene una responsabilidad de carácter subjetivo, conforme a unas características especiales y supera el juicio de proporcionalidad por cuanto tiene un fin constitucionalmente válido como lo es la efectiva protección del ambiente sano para la conservación de la humanidad y constituye una medida idónea y adecuada para esta salvaguarda. Dada la posición de garante que también tienen los particulares, resulta indispensable la medida por la carga de responsabilidad mayor frente a la protección del medio ambiente sano.*

Que el **Artículo 5° de la ley 1333 de 2009** determina: *Infracciones.* Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación

Que el artículo 24 de la ley 1333 de 2.009 ordena que se formularan cargos Cuando exista mérito para continuar con la investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, procederá a formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del daño ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado

Que la infracción a la legislación ambiental se puede tipificar de dos maneras: por acción o por omisión del agente encargado de cumplir con las obligaciones legales.

Por acción se quebrantan las normas que imponen prohibiciones, obligaciones o condiciones para el uso de recursos naturales renovables o del medio ambiente cuando existe una labor o una gestión desarrollada que es atribuible al presunto infractor y que contraría las disposiciones legales.

AUTO N°  
N° . 0 0 0 9 4 8 DE 2013

**POR EL CUAL SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS CONTRA ACUACULTIVOS  
LOS GALLITOS LIMITADA IDENTIFICADA CON NIT 806.016.265-9,**

Por omisión se controvierten las normas cuando existe negligencia, inadvertencia u olvido por parte de quien tiene a su cargo el deber de atender una prohibición o de cumplir una obligación o condición para el uso de recursos naturales renovables o del medio ambiente.

Indicado lo anterior, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico CRA, en uso de sus facultades constitucionales y legales, y siempre actuando en pro de la protección del medio ambiente, considera que el investigado incurre en una presunta transgresión a la normatividad ambiental al incumplir con los requerimientos dispuestos en la Resolución No 00026 de Febrero 3 de 2.009 y los Autos 00970 de Octubre 7 de 2.010 y 00002 de Enero 21 de 2.013. Obligaciones que tienen los poseedores de Permiso de vertimientos con la Autoridad ambiental competente.

Que el Artículo 58 del Decreto 3930 de 2.010, dispone "*Seguimiento de los permisos de vertimiento, los Planes de Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV: Con el objeto de realizar el seguimiento, control y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competente efectuará inspecciones periódicas a todos los usuarios.*

*Sin perjuicio de lo establecido en los permisos de vertimiento, en los Planes de Cumplimiento y en los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competente, podrá exigir en cualquier tiempo y a cualquier usuario la caracterización de sus residuos líquidos, indicando las referencias a medir, la frecuencia y demás aspectos que considere necesarios".*

Que las autoridades ambientales se encuentran instituidas para velar por la preservación de los recursos naturales renovables y el medio ambiente, y en torno a ello se trata de proteger la salud humana y animal, los organismos vivos en general, los ecosistemas, incluyendo el componente social, es decir el efecto producido sobre el tejido social. Es por tal motivo, que la ley ha dotado a diferentes instituciones de variadas facultades, tendientes a controlar fenómenos que puedan producir deterioro o afectaciones al medio ambiente y/o los recursos naturales renovables,.

Que el parágrafo 3° del artículo 85 del título XII de la ley 99/93, establece para la imposición de sanciones el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o estatuto que lo modifique o sustituya.

Que el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99/93, enumera como una de las funciones a cargo de las Corporaciones Autónomas Regionales, "*Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados".*

Que el artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, establece que "*El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades, a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo sostenible, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos".*

AUTO N° DE 2013

Nº · 0 0 0 9 4 8

**POR EL CUAL SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS CONTRA ACUACULTIVOS  
LOS GALLITOS LIMITADA IDENTIFICADA CON NIT 806.016.265-9,**

Parágrafo. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales".

Así mismo el artículo 2° ibídem, consagra que "El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales; las corporaciones autónomas regionales y las de desarrollo sostenible; las unidades ambientales urbanas de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993; los establecimientos públicos a los que hace alusión el artículo 13 de la Ley 768 de 2002; la Armada Nacional; así como los departamentos, municipios y Distritos, quedan investidos a prevención de la respectiva autoridad en materia sancionatoria ambiental. En consecuencia, estas autoridades están habilitadas para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley y que sean aplicables según el caso, sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades."

Que de conformidad con el artículo 18° de la Ley 1333 de 2009 "El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva; mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos."

Que el investigado desarrolló un presunto quebrantamiento por omisión del orden legal ambiental, a través de la ejecución de una conducta a título de dolo, que se materializa con el incumplimiento de los requerimientos dispuestos en la Resolución No 00026 de Febrero 3 de 2.009 y los Autos 00970 de Octubre 7 de 2.010 y 00002 de Enero 21 de 2.013; Obligaciones que tienen los poseedores de Permiso de vertimiento y que se refieren específicamente al deber de presentar la caracterización de las aguas residuales, cuando y en la forma que las autoridades ambientales competentes lo soliciten.

Teniendo como base en las anteriores consideraciones, y bajo el entendido que esta entidad debe velar por la protección a los Recursos Naturales Renovables y propender por la conservación de un ambiente sano como patrimonio público, a lo que se aúna que a las Corporaciones Autónomas Regionales les compete ejercer las funciones de control y seguimiento ambiental a las actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental, y dada la prueba recaudada, se

**DISPONE**

**PRIMERO:** Formular al camaronera Acuacultivos los Gallitos Limitada identificada con NIT 806.016.265-9, representada legalmente por el señor Luis Eduardo Curiel Fuenmayor, el siguiente pliego de cargo:

- **Cargo Unico:** Presuntamente haber transgredido la investigada las obligaciones impuestas la Resolución No 00026 de Febrero 3 de 2.009 y los Autos 00970 de Octubre 7 de 2.010 y 00002 de Enero 21 de 2.013; Obligaciones que tienen los poseedores de Permiso de vertimiento y que se refieren específicamente al deber de presentar la caracterización de las aguas residuales, cuando y en la forma que las autoridades ambientales competentes lo soliciten.

AUTO. Nº 000948 DE 2013

**POR EL CUAL SE FORMULA UN PLIEGO DE CARGOS CONTRA ACUACULTIVOS  
LOS GALLITOS LIMITADA IDENTIFICADA CON NIT 806.016.265-9,**

**SEGUNDO:** Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo al interesado o a su apoderado debidamente constituido, de conformidad con lo establecido en la ley 1437 de 2.011.

**PARAGRAFO:** En el evento de no lograrse la notificación personal del o de los investigados, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 69 de la ley 1437 de 2.011

**TERCERO:** Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del presente acto administrativo, el representante legal o apoderado del Luis Eduardo Curiel Fuenmayor identificado con cédula de ciudadanía 73.138.621 en su calidad de Representante Legal de la camaronera Acuacultivos los Gallitos Limitada , empresa con dirección de notificación en la Urbanización la Española, Manzana S, Lote 10 de la ciudad de Cartagena, Bolivar , podrán presentar los respectivos descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de pruebas que considere pertinentes y que sean conducentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009.

**CUARTO:** Practicar las pruebas necesarias y conducentes para el esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de infracción a las normas sobre protección ambiental.

**PARAGRAFO:** La totalidad de los costos que demande la práctica de prueba serán a cargo del presunto infractor.

**QUINTO:** contra el presente acto administrativo procede en el recurso de reposición en efecto devolutivo, tal como lo establece, el inciso primero del artículo 24 de la ley 1333 de 2.009.

Dado en Barranquilla a los

26 NOV. 2013

**NOTIFÍQUESE, Y CUMPLASE**



**JULIETTE SLEMAN CHAMS  
GERENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL ( c )**

Exp. 1527-350

Proyectó: Jorge Mario Camargo Padilla – Contratista

Revisó: Karem Arcón Jimenez –Prof- Esp Grado 16